

Capítulo 4

Conclusiones y recomendaciones

Esta sección final está dedicada a presentar algunas de las principales conclusiones con respecto al estado de situación de la agricultura campesina e indígena y su relación con la seguridad y soberanía alimentaria. También está dedicada a ensayar algunas recomendaciones para políticas públicas que podrían resultar útiles a la hora de discusión de estrategias de promoción de la agricultura a pequeña escala, reducción de la pobreza rural o reconsideración de la política agropecuaria dominante que por ahora deposita la seguridad y soberanía alimentaria casi exclusivamente en manos del sector agroindustrial.

1. La sociedad rural de campesinos e indígenas

Una de las razones fundamentales para retornar a los estudios sobre la sociedad rural contemporánea, particularmente de la agricultura campesina e indígena, es que la población rural sigue en peor situación socioeconómica que el resto de los bolivianos, tiene menor y decreciente participación en los beneficios que genera el crecimiento económico y el desarrollo del agro, por tanto, la brecha de desigualdad se amplía. Y, ante todo, su rol económico e histórico en calidad de productores agropecuarios está debilitado al extremo que están a punto de ser privados de su derecho de participar activamente en la vida económica nacional.

Esta afirmación podría parecer exagerada sobre todo si nos fijamos en los indicadores de pobreza recientes que muestran que más gente del campo tiene acceso a mejores ingresos, servicios de salud, educación y asistencia técnica para la producción agropecuaria. En efecto, hemos visto que en 2001 el 84,1 por ciento de la población rural es-

taba en situación de pobreza pero para el año 2012 la cifra se redujo a 71,5 por ciento. Esto es 12,6 puntos porcentuales de reducción pero en áreas urbanas la pobreza se redujo del 44,4 por ciento a 32,1 por ciento (12,3 puntos). Estos cambios favorables no cierran la brecha campo-ciudad que se mantiene por encima de 39 puntos porcentuales. Las reducciones de pobreza están explicadas por el incremento significativo en el gasto social y la ampliación de los servicios básicos y públicos. Pero lo que nos obliga a ser cautelosos es que estas mejoras en las condiciones socioeconómicas básicas no se sustentan en un aparato productivo dinámico y controlado por los propios campesinos e indígenas. Apenas son perceptibles los cambios en cuanto a extensiones de tierras cultivadas, volúmenes de producción campesina e indígena y rendimientos agrícolas.

El mundo rural de los campesinos e indígenas también es más heterogéneo que en el pasado. Si bien la gran mayoría de las familias siguen en situación de pequeños productores orientados a la subsistencia y autoabastecimiento, no se puede ignorar que una parte de esta sociedad rural está embarcada en iniciativas agropecuarias más o menos consolidadas y que tienen un lugar en el mercado. La lista es larga e incluye productores de hoja de coca, pequeños sojeros, quineros del altiplano, floricultores de las zonas semi-cálidas, lecheros cerca de las principales ciudades, productores de café, sorgo, arroz, entre otros. Hemos mostrado esta realidad diversa a partir de una tipología de productores que hemos ensayado en este trabajo: i) los pequeños productores de *commodities* subordinados al agronegocio, ii) los pequeños productores orientados preferentemente al mercado interno y iii) los productores de subsistencia. Esta tipología más que reproducir la clasificación clásica de campesinos ricos, medianos y pobres, más bien se aproxima a un esfuerzo por entender la realidad campesina e indígena en conexión con la agricultura a gran escala. Dicho de otra forma, serían productores consolidados, intermedios y periféricos.

Las diferenciaciones campesinas ocurren en el contexto de expansión de la agricultura comercial de exportación y también reflejan la emergencia de unidades productivas agropecuarias en diferentes

regiones del país. Hasta antes de la consolidación de las zonas de colonización de los años sesenta y setenta del siglo pasado, la sociedad rural estaba constituida básicamente por los habitantes de tierras altas (valles y altiplano) pero esto ha cambiado substancialmente en las últimas dos o tres décadas. La importancia de agricultores campesinos e indígenas en las áreas de colonización que comienzan en el norte de La Paz y llegan hasta las zonas de expansión del departamento de Santa Cruz es cada vez más evidente en términos de población, unidades productivas agropecuarias y participación económica. Son asentamientos contemporáneos que tienen cierta correlación con la emergencia de unidades productivas con mayor dinámica económica. Como casos estudiados que corresponden a estas regiones hemos presentado concretamente la situación de los productores de hoja de coca de Yanacachi (Los Yungas), los productores agropecuarios de Rurrenabaque (Beni) y los pequeños sojeros colonizadores de Cuatro Cañadas (Santa Cruz). Estos casos representan dinámicas locales dentro de las cuales la renta agraria es mayor y tiende a crecer en relación con otras regiones rurales. Sin embargo, tampoco son zonas donde todos tienen mejores condiciones económicas, menor incidencia de pobreza e igual grado de seguridad alimentaria. Particularmente en la zona de expansión sojera, los procesos de diferenciación campesina son más evidentes entre los pequeños productores y en relación con el sector empresarial.

2. Urbanización y migración

La migración del campo a la ciudad no es un fenómeno reciente sino que es parte del crecimiento urbano que comienza a surgir con fuerza en las últimas cinco décadas. El crecimiento demográfico casi nulo que hoy caracteriza al sector rural comienza a mediados de los años setenta del siglo pasado. En la parte andina la imposibilidad de acceso a nuevas tierras ha sido una causa estructural para la expulsión de las nuevas generaciones y una forma de escapar de la pobreza extrema. En la década de los ochenta la nueva política económica de liberalización ha creado circunstancias más adversas para la agricultura campesina e indígena. Es la época en que comienzan a surgir

nuevas formas de migración de tipo transnacional hacia los países vecinos como Argentina, Brasil, Chile e incluso a España y otros.

Se ha podido constatar que la pronunciada migración genera dificultades y nuevos desafíos para los campesinos e indígenas que viven en sus comunidades. Una de las batallas que tienen los comunitarios es mantener el funcionamiento de los centros educativos de primaria debido a que la reducción en el número de alumnos es un motivo de primer orden para la intervención del Ministerio de Educación y posterior reducción de profesores y recursos asignados. Por esa razón es común que el número de niños y niñas registrados en los diferentes cursos de primaria sea mayor que el número real de estudiantes. También las comunidades rurales tienen presión de los gobiernos locales para mantener un número estable de miembros activos, lo cual es especialmente decisivo para la asignación de presupuestos públicos de coparticipación tributaria. Por esta razón las actuales listas de afiliados en las comunidades campesinas e indígenas tienen al menos dos categorías de miembros: los “estantes” que efectivamente viven en la comunidad y de forma estable y los “residentes” que es la población migrante que ahora vive en las ciudades pero que todavía conserva algunos lazos materiales, sociales y económicos con sus comunidades de origen. Por tanto para los registros oficiales como el censo de población, la población registrada es mayor a la población estante.

Algunos estudiosos han propuesto identificar en el censo de población a los habitantes con “doble residencia” a fin de conocer con mayor precisión las nuevas dinámicas rurales-urbanas. Esta propuesta no ha prosperado ni fue tomada en cuenta en el último censo de 2012 pero ello no invalida la constatación empírica de que existe un número importante de bolivianos que viven entre el campo y la ciudad, algo que por supuesto tiene relación con nuevas dinámicas económicas que combinan la agricultura con empleos informales, temporales o precarios. Al parecer la multiresidencia no ocurre a nivel de hogares sino solo algunos de sus miembros con los que tienen movilidad espacial precisamente por el carácter precario de las fuentes de ingresos rurales y urbanas. En otros estudios de caso

hemos constatado que la feminización de la agricultura campesina e indígena es un fenómeno visible, puesto que las mujeres son quienes se quedan en sus comunidades cumpliendo roles reproductivos, productivos y comunitarios mientras que los hombres se desenvuelven en un espacio social, económico y político mucho más extendido (Colque y Soria Galvarro 2014). En estas condiciones, la seguridad y soberanía alimentaria dependen de múltiples estrategias económicas que se complementan para la mayoría de los campesinos e indígenas.

3. Seguridad y soberanía alimentaria

Con base en el análisis de la información primaria, los estudios de caso y la revisión de información secundaria, podemos señalar que, en general, hemos encontrado una realidad rural donde no existen situaciones de extrema inseguridad alimentaria, hambre y desnutrición. A pesar de que varios factores inhiben el crecimiento de la agricultura campesina e indígena, se observa que una reasignación dinámica de tierra, trabajo y capital dentro del propio sector agrario o hacia otros rubros productivos ha mejorado la habilidad de los hogares campesinos e indígenas de adquirir los alimentos básicos que necesitan. Esta situación alimentaria más favorable también ha sido consecuencia de políticas públicas de mitigación de la pobreza mediante mayor gasto social, inversión pública y presupuestos municipales. Las transferencias directas como los bonos anuales para la población vulnerable son beneficios que reciben directamente los hogares rurales. Pero también las inversiones públicas y municipales han generado empleos directos en obras de infraestructura, servicios y otros, aunque para un sector minoritario.

El mayor grado de seguridad alimentaria es perceptible en términos de cantidad, diversidad de alimentos consumidos y niveles de gastos. Utilizando metodologías de evaluación de seguridad alimentaria del Programa Mundial de Alimentos (PMA 2009) hemos visto que el consumo en términos de cantidad cumple con los estándares mínimos (mayor a 1.600 Kcal/cápita/día) en la mayoría de los hogares campesinos e indígenas aunque en regiones como el

Chaco (Macharetí) dos de cada diez personas estarían por debajo de los mínimos aceptables. Los problemas alimentarios refieren a la calidad de la dieta en términos de variedad de alimentos y valores nutricionales. Es una deficiencia común a todas las regiones y principalmente se refleja en la ausencia del consumo de lácteos, leguminosas, frutas y verduras. La baja calidad nutricional de la dieta obedece a ciertos factores que varían según la capacidad adquisitiva de las familias. Dentro de las familias con ingresos altos aumenta el consumo de carnes y alimentos procesados o industrializados pero con una baja incidencia en el aumento de consumo de bienes deficitarios. Por ejemplo, en zonas tropicales las familias con ingresos altos sustituyen el consumo de yuca por papa -alimento no tradicional de la región, más costosa y de mayor prestigio- es decir tubérculos con similares cualidades nutritivas. Entre las familias pobres el consumir alimentos con calidad y variedad adecuada está limitado por su baja capacidad adquisitiva y porque los productos de autoabastecimiento están pobremente diversificados.

Los niveles de gasto en alimentos se han estimado según el Indicador de Acceso a Alimentos (IAA) que hemos adoptado para valorar la confiabilidad y sostenibilidad de las fuentes de suministro de alimentos (compra, producción propia, intercambio) y de fuentes de ingresos (venta de productos, fuerza de trabajo). En este trabajo hemos abordado ampliamente las implicaciones que tiene una creciente orientación de la agricultura campesina e indígena a la producción especializada y comercial. Por un lado genera una alta capacidad adquisitiva por ingresos provenientes de la producción especializada para el mercado, por tanto, las posibilidades de acceso a alimentos son mayores. También estos cambios traen consigo mayor dependencia de alimentos procesados e industrializados y grados significativos de uniformización o estandarización de los alimentos consumidos y adquiridos fuera del predio. Sin embargo y por otro lado, la dependencia de un rubro productivo especializado y de los precios de mercado implica pérdida de control sobre los alimentos que consumen. En esta situación, se convierten en familias no productoras de alimentos sino de insumos agropecuarios que tienen múltiples usos en

la industria alimenticia y otros sectores económicos. Las familias rurales pobres aunque alcanzan un nivel de gasto alimentario que no las condena al hambre y desnutrición severa, tienen fuentes de ingresos poco confiables y sostenibles debido a que la pluriactividad y diversidad productiva es señal de precariedad e inestabilidad económica. No hemos encontrados ejemplos y casos donde la pluriactividad reporte ingresos o calidad de canasta alimentaria iguales o mayores que la agricultura especializada en producción de soya o coca.

A lo largo de este trabajo hemos usado el término “seguridad y soberanía alimentaria” para poner de relieve que la habilidad de adquirir alimentos es un asunto complejo y conceptualmente irresuelto porque varias preguntas quedan sin responder. ¿En qué términos se debe entender el tener disponibilidad y acceso a alimentos?, ¿en términos de capacidad adquisitiva monetaria, precios o capacidad de autoabastecimiento de trabajadores del campo? El concepto de soberanía si bien sigue siendo asociado popularmente a la idea de autoabastecimiento y promueve una mayor politización de la cuestión de quién producirá los alimentos y cómo nos alimentaremos a futuro, también ayuda a visualizar un norte que queremos muchos: agricultura sostenible, producción agroecológica y socialmente justa. Al respecto, los hallazgos no son muy alentadores para quienes depositan sus esperanzas en la agricultura campesina e indígena como el fundamento de un nuevo régimen agrario y sustento de la seguridad alimentaria nacional. En términos de volúmenes de producción y participación en el mercado de alimentos, este sector más bien pierde impulso y es desplazado por la agricultura a gran escala que se gesta y se expande en las tierras bajas. Los hogares rurales han introducido en su canasta básica alimentos de origen industrial y alimentos procesados (azúcar, arroz, fideos, aceites, pan, refrescos y otros) de un modo tal que representan en términos de valor más de la mitad de los productos básicos consumidos. Esto ocurre no solamente entre las familias rurales acomodadas sino entre las unidades productivas agropecuarias parcialmente mercantiles y también entre los productores de periferia o subsistencia.

Si bien los campesinos e indígenas no sufren hambre ni desnutrición severa, este trabajo advierte sobre la fragilidad y vulnerabilidad de la actual situación alimentaria dadas las trayectorias y dinámicas agrarias dominantes que privan al campesino e indígena de su derecho a participar activamente en el desarrollo económico y social del país. Los estándares mínimos y aceptables que se perciben en la alimentación no tienen por base material una agricultura vigorosa y operada por las unidades productivas agropecuarias de tipo familiar que analiza este trabajo. Una consecuencia de este estado de situación es la dependencia creciente de recursos externos para la seguridad alimentaria de los pobres rurales. Por ahora estos recursos externos provienen de varios canales y casi todos relacionados con la mayor captación de recursos a nivel nacional por la creciente actividad extractiva y crecientes precios internacionales que han perdurado hasta ahora y en la última década (2006-2014). En consecuencia, uno de los desafíos a futuro es cómo disminuir la dependencia de recursos externos para los pequeños agricultores campesinos e indígenas.

4. ¿Fin de la agricultura campesina e indígena?

Hemos empezado señalando que la marginalización de la agricultura campesina e indígena ocurre en medio de un crecimiento sostenido aunque modesto de la agricultura boliviana desde inicios de los noventa del siglo pasado. Los campesinos e indígenas no han sido excluidos por completo de este proceso sino que el rasgo dominante es su posición cada vez más periférica en calidad de actores económicos. Esto expone a la mayoría de la población rural a una situación tal que no puede gozar de sus derechos económicos y sociales sin la asistencia externa en forma de transferencias, bonos, pequeñas subvenciones o acceso asistido a nichos de mercado. Una de las implicaciones que no se puede soslayar es que la seguridad y soberanía alimentaria no podría alcanzarse sin depender de los recursos externos y condiciones de mercado que están fuera del control local. En otras palabras es una población relegada. Aquí surge una pregunta que no se puede esquivar: ¿este es el principio del fin o directamente el fin del campesinado como clase social y actor productivo relevante?

Responder a esta interrogante escapa a los propósitos de este trabajo pero en términos analíticos constituye un elemento de referencia a no perder de vista para recapitular y redondear algunas conclusiones sobre el contexto o entorno político-económico en el que se debe entender la sociedad rural de los más pobres.

El crecimiento desigual entre la agricultura campesina e indígena y la agricultura comercial (mediana y grande) toma la forma de un modelo agrario bifurcado y territorializado. El punto de bifurcación se inicia con la Reforma Agraria de 1953 y se cristaliza en los años noventa del siglo pasado cuando comienza el *boom* de la soya y oleaginosas. No ha sido un proceso agrario inclusivo en términos de redistribución de tierras, creación de nuevas unidades agropecuarias en las zonas con mayor potencial productivo o guiados por la necesidad de consolidar una estrategia nacional de seguridad y soberanía alimentaria. La agricultura comercial ha adoptado un modelo productivo basado en capital y tecnología (maquinarias agrícolas, semillas genéticamente modificadas, agroquímicos, sistemas de monocultivos) que requiere muy poca mano de obra. En contraste, la agricultura campesina e indígena no ha sufrido cambios sustanciales en las técnicas de producción empleadas, tamaño de capital invertido ni en la intensidad del empleo de la fuerza laboral. Estas realidades han coexistido pero cada una por rumbos distintos.

En medio de estos dos sistemas dominantes está una gama amplia de sistemas productivos que emergen en algún punto y momento. Algunos tienen su origen en los procesos de diferenciación campesina, se conectan a los eslabones agroindustriales, se posicionan en ciertos nichos de mercado y tienen opciones de consolidarse como unidades mercantiles exitosas. Otros emergen directamente de la agricultura comercial y esto probablemente es más visible cuando los capitales transnacionales pasan a dirigir los complejos o cadenas agroalimentarias sobre todo para controlar la renta agraria generada por la exportación de materias primas agrícolas. En este proceso, muchos propietarios de grandes extensiones de tierra pasan a beneficiarse solo de una parte de la renta de la tierra (alquiler, arrendamiento) y pierden control sobre la renta mayor generada por el

proceso productivo, transformación y transporte a mercados internacionales. Es decir, las unidades productivas agropecuarias no son estáticas en tamaño, importancia o quién usufructúa las mismas.

Por otro lado, el modelo agroalimentario que rige está fundada o tiene su razón de ser en políticas de liberalización de la economía. El comercio exterior del sector agrario no se caracteriza por políticas proteccionistas o de regulación de las exportaciones e importaciones. Es cierto que desde el 2006 ha habido algunos intentos por establecer cuotas y gravámenes para garantizar el abastecimiento del mercado interno de alimentos. También es cierto que el gobierno ha creado empresas públicas como la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) para promover la producción, transformación, comercialización y estabilización de los precios. Sin embargo, estas políticas no han cambiado la desigual correlación de fuerzas en el escenario internacional ni el papel que juega el agro boliviano en el contexto internacional. El sector de la agricultura comercial tiene por papel central el producir y exportar productos agropecuarios con bajo valor agregado, el sector mayoritario de campesinos e indígenas produce alimentos tradicionales no transables y el país se abastece vía importaciones de trigo y alimentos procesados.

Bajo este entendido y en el marco de los alcances de este trabajo podemos señalar que la marginalización de los campesinos e indígenas no es un hecho coyuntural ni puntual sino que persistirá al menos en el mediano plazo. En términos analíticos, la desaparición del campesinado como forma de producción depende, más que de transformaciones agrarias, de la vigencia sostenida de una economía de tipo extractivista o el desarrollo del capitalismo con sectores industriales y de servicios dinámicos en tal grado que sean sectores económicos capaces de absorber la fuerza de trabajo rural. Pero estos y otros posibles escenarios no llaman la atención ni son parte de discusiones bolivianas. Por eso mismo las respuestas a los problemas del campesinado son ambiguas. En un primer momento (2006-2009) el gobierno de Evo Morales parecía inclinarse hacia la recuperación de saberes y valores comunitarios de los campesinos e indígenas para sentar las bases de formas de producción poscapitalistas. Pero como se explicó en este trabajo, el

2010 y 2011 se produjo un cambio de rumbo en la política estatal que más bien parece inclinarse por la postura de que la desaparición del campesinado y de las penosas formas de vida rural no son malas noticias sino condiciones necesarias para el desarrollo capitalista.

Para concluir y después de haber ofrecido algunos rasgos y argumentos de la marginalización campesina e indígena, corresponde proponer algunas recomendaciones para políticas y acciones de lucha contra el deterioro de la base productiva, la alta dependencia de recursos externos y la fragilidad de la seguridad y soberanía alimentaria de los pobres rurales.

5. Recomendaciones

5.1 La necesidad de reorientar la agenda agropecuaria nacional

Es necesario reconocer que los esfuerzos recientes (2006-adelante) de los responsables de formular y aplicar políticas públicas han demostrado ser insuficientes y no son satisfactorios en términos de alcanzar mayor inclusión social y revitalización de la agricultura campesina e indígena. Por tanto, a partir de un diagnóstico certero es necesario valorar avances, pero sobre todo las falencias que se han encontrado para la aplicación, en los últimos años, de los distintos planes y programas. A nuestro juicio es necesario privilegiar la superación de dos grandes obstáculos: la disminución del rol productivo del sector campesino e indígena y la desigualdad entre los actores productivos del sector agropecuario.

Para esto hace falta no sólo evaluar la situación agraria en función de los indicadores socioeconómicos y de vulnerabilidad en la seguridad y soberanía alimentaria de los pobladores rurales sino identificar los componentes o factores que coadyuvan o limitan alcanzar mejores condiciones de vida en el campo. Por otro lado, en este trabajo hemos planteado que los mayores gastos sociales y políticas de asistencia que mejoran la situación de los pobres rurales, pueden estar ocultando el frágil estado de situación de la base productiva campesina e indígena. Un diagnóstico complaciente y tardío de la lentitud con que se desenvuelve el aparato productivo agropecuario campesino

puede generar mayores costos sociales y exponer a los más pobres a una mayor dependencia de factores externos en el futuro.

5.2 Dinámicas diferenciadas, políticas diferenciadas

Es importante estimular el desarrollo campesino e indígena según sus dinámicas y particularidades y para ello es necesario prestar la atención debida a políticas diferenciadas según tipos específicos de agricultores campesinos. Debe quedar claro que no todos se encuentran en la misma situación ni tienen las mismas necesidades.

Para el sector de los agricultores familiares productores de *commodities* conviene establecer algunas regulaciones que les protejan de los riesgos que implica embarcarse en una dinámica económica dominada por la agricultura comercial a gran escala y los capitales transnacionales. Esto es particularmente válido para las zonas de expansión del departamento de Santa Cruz donde conviven pequeños agricultores de las zonas de colonización y grandes productores. Estas políticas debieran contemplar resguardos para evitar una expansión indiscriminada de la frontera agrícola a costa de bosques y cultivos diversificados. Es importante que el Estado garantice que el actual rol subordinado de los pequeños productores de soya no se convierta progresivamente en una forma de despojo directo e indirecto de la tierra.

Para el sector de pequeños productores insertados al mercado se requieren estímulos financieros, políticas tributarias diferenciadas, compras públicas a precios justos y promoción de políticas orientadas a la sostenibilidad ambiental y modelos agroecológicos de producción de cultivos nativos de alto valor. Pero especialmente hacen falta políticas y programas que atenúen los efectos negativos de la política macroeconómica antiinflacionaria y de la todavía vigente libertad de importaciones de alimentos. Las experiencias de compras estatales de alimentos están rezagadas en relación a los logros de países de la región como Brasil, Colombia, Ecuador o Perú. Por tanto hacen falta programas públicos con mayor presupuesto y alcance.

Para los campesinos e indígenas en situación de vulnerabilidad, esto es la mayoría de los pobladores rurales, las políticas públicas para mejorar los servicios en salud, educación y bonos sociales focalizados (niños, madres y ancianos) siguen siendo importantes. Sin embargo, el foco de atención que debería recibir mayor atención y prioridad es cambiar sustancialmente las condiciones económico-productivas locales. Los programas clásicos de sistemas de riego, caminos departamentales y acceso a fuentes de energía (electricidad y gas) son válidos pero hacen falta otras perspectivas desde donde valorar nuevas oportunidades productivas. Una de ellas es la todavía dubitativa reorientación del gasto público municipal y de programas como Bolivia Cambia Evo Cumple, o Mi Agua, actualmente más centrados en obras de infraestructura políticamente visibles (edificios municipales, canchas de fútbol, tinglados, agua potable) hacia proyectos y programas productivos de largo aliento: efectivo registro de todas las UPA que permita su categorización, renovados sistemas de riego que ahorren agua y multipliquen la eficiencia de su uso, caminos vecinales de tránsito permanente, asistencia técnica de calidad ofertada directamente a las familias rurales, provisión de semillas y abonos, sistemas de acopio y mercadeo, activas compras estatales, mayor protagonismo de gobernaciones y alcaldías, efectivo control al contrabando de internación de alimentos, disminución de las importaciones de alimentos. En definitiva promover que la actividad productiva de las familias rurales sea rentable y sostenible.

5.3 Un papel productivo explícito para la agricultura campesina e indígena

Entre los que formulan políticas públicas y entre los propios productores existe un convencimiento explícito de que la actividad agropecuaria a pequeña escala es el modo de vida de la mayoría de los campesinos e indígenas pero esta convicción no se traduce en acción o en el diseño de una política de Estado que otorgue un papel productivo explícito a quienes trabajan la tierra a pequeña escala, practican el manejo rotativo de parcelas, utilizan semillas propias y abonos orgánicos. En la práctica, la regla que se aplica es simple pero errónea: pequeños

programas y proyectos para las pequeñas unidades productivas agropecuarias.

Para que los agricultores a pequeña escala tengan un papel productivo explícito se debe asignar un lugar privilegiado o una cuota significativa de participación a la producción de origen campesino e indígena dentro del mercado nacional y regional de alimentos. Esto no será posible desde su actual posición marginal y subordinada sino en el marco de una estrategia de mediano y largo plazo de transformación de la matriz agro-productiva y agro-alimentaria. Tampoco se debe asumir *a priori* que los campesinos e indígenas tienden a producir alimentos sino que es necesario reconocer que en varios contextos y regiones muchos ya decidieron no producir alimentos, o no hacerlo bajo técnicas tradicionales. Producir cultivos más rentables así sea a costa de altos costos ambientales y con uso indiscriminado de agroquímicos es una realidad en muchas regiones rurales y en parte es una elección democrática y colectivamente defendida por campesinos e indígenas, que necesita ser discutida, internalizada y modificada, mediante estímulos públicos.

5.4 Cooperación a escala regional

El asociativismo y las distintas formas de cooperación entre pequeños productores no son nuevos en Bolivia pero se han quedado ancladas en formas simples o embrionarias. Esto puede resultar difícil de aceptar para muchos en un medio como el nuestro donde conceptualmente se valora y se aprecia de sobremanera las formas comunitarias que estarían vigentes en casi todas las regiones rurales. No obstante que este es un tema aún en debate, es recomendable adoptar formas de cooperativismo que superen las actuales prácticas de asociativismo que privilegian solamente estrategias de comercialización, compras conjuntas de insumos o inversiones en pequeñas infraestructuras productivas que benefician a pocas familias.

Si bien la comunidad campesina e indígena, como unidad mínima de organización, es una forma de protección social de los intereses de los más pobres, por otro lado también obstaculiza el escalamiento de programas y proyectos productivos. Como se puede constatar

en campo, los sistemas de riego fragmentados incluso a nivel de las comunidades son una consecuencia directa de la falta de confluencia de intereses de un mayor número de productores. La idea de cooperación a mayor escala también podría aplicarse para crear mercados regionales de alimentos. Al menos esto es lo que podría concluirse a partir de estudios de caso como el del municipio de Rurrenabaque, pero para ello se requiere la concurrencia eficaz de los aparatos públicos en los niveles nacional, departamental y local, así como de los propios productores organizados.

5.5 Políticas de nutrición y alimentación saludable

Si es cierto que la pequeña agricultura campesina está asociada estrechamente a la producción de alimentos orgánicos y saludables, sería correcto señalar que elevar el consumo de este tipo de alimentos podría mejorar la dieta alimentaria en términos de calidad y variedad de la canasta básica. Hemos visto que si bien en términos de cantidad consumida (Kcal/cápita/día) en Bolivia se cumplen los estándares mínimos de alimentación, la mayor deficiencia de la dieta rural está en la baja calidad y variedad que caracteriza a la mayoría de los alimentos consumidos en los hogares del campo sin que sea muy relevante si estas familias tienen altos o bajos niveles de ingresos económicos. Esto probablemente también sucede a nivel de los centros urbanos.

Un aumento en el consumo de alimentos naturales y diversificados de origen campesino e indígena crearía incentivos para mejorar los niveles de producción y productividad en el sector. Pero también sabemos que una limitación de fondo para la expansión de este tipo de consumo sigue siendo la composición de la oferta de alimentos dominada por suministros alimenticios procesados y de origen industrial que son de más fácil acceso y menos perecibles. La disponibilidad y el acceso a precios relativamente bajos a alimentos preparados como los *junk food* inhibe la puesta en marcha de programas de nutrición y alimentación saludable e impide una mayor valorización de cultivos tradicionales y diversificados. Cambiar esos malos hábitos de consumo es una tarea urgente de las instituciones públicas y de la propia sociedad, especialmente mediante campañas en las escuelas y centros laborales.

Bibliografía

- Agarwal, B. (2014). «Food sovereignty, food security and democratic choice: critical contradictions, difficult conciliations». *Journal of Peasant Studies* 41 (6), 1247-1268.
- Ayo, D. (2014). <http://www.nuevacronica.com> Obtenido de <http://www.nuevacronica.com/sociedad/por-que-la-propuesta-de-garcia-linera-es-un-fracaso-cinco-razones/>
- Bernstein, H. (2010). «Class dynamics of agrarian change», *Agrarian Change and Peasant Studies*. La Haya, Holanda.
- CAO. (2012). *Números de Nuestra Tierra*. Santa Cruz: Bolivia. Cámara Agropecuaria del Oriente.
- Castañón, E. (2014). *Cuando la soya se impone, transformaciones en las comunidades campesinas y sus implicaciones alimentarias*. *Cuestión Agraria*, 1 (1), 27-53. La Paz, Bolivia: Fundación TIERRA.
- CELADE. (2014). *Centro Latinoamericano de Demografía*. Obtenido de <<http://celade.cepal.org/redatam/index.es.html>>
- Chang, H. (2009) «Rethinking public policy in agriculture: lessons from history, distant and recent», *The Journal of Peasant Studies*, 36 (3), 477-515.
- Chávez, G. (2013). *Ingresos fiscales por explotación de hidrocarburos en Bolivia*. BID.
- Colque, G. (2014). *Expansión de la frontera agrícola: Luchas por el control y apropiación de la tierra en el oriente boliviano*. La Paz, Bolivia: TIERRA.

- Colque, G. y Soria Galvarro, F. (2014). *Inclusión en contextos de exclusión. Acceso de las mujeres campesinas e indígenas a la tierra*. La Paz, Bolivia: TIERRA.
- Córdova, D., y K. Jansen. (2013) «The Return of the State: Neocollectivism, Agrarian Politics and Images of Technological Progress in the MAS Era in Bolivia.» *Journal of Agrarian Change*.
- CSCIB. (2014). *Comunidades departamento de La Paz*. Obtenido de <<http://www.cscbbol.org/node/2>>
- Eyzaguirre, J. (2014). *Dependencia y autoabastecimiento alimentario en la TCO Guaraní de Macharetí*. *Cuestión Agraria*, 1 (1), 77-103. La Paz, Bolivia: Fundación TIERRA.
- FAN. (2015). *Impactos de la deforestación 2015*. Columna de opinión institucional de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). Página Siete, 9 de febrero de 2015.
- Fundación TIERRA. (2014) *Cuestión Agraria. Revista Boliviana de Estudios Agrarios y Rurales*. Seguridad y soberanía alimentaria entre campesinos e indígenas. La Paz, Bolivia.
- Fundación TIERRA. (2013). *¿Comer de nuestra tierra? Estudios de caso sobre tierra y producción de alimentos en Bolivia*. La Paz, Bolivia.
- Gobierno de Bolivia. (2011). *Ley N° 144 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria*.
- INE. (2009). *Encuesta Nacional Agropecuaria 2008*. La Paz, Bolivia: INE.
- INE. (2014) *BOLIVIA características de población y Vivienda Censo Nacional de Población y Vivienda 2012*. La Paz, Bolivia: Instituto Nacional de Estadística.
- INE. (2014b). *Un Pincelazo a las estadísticas con base al Censo Nacional Agropecuario 2013*. La Paz, Bolivia: INE.
- INE. (2015). *Censos Bolivia*. Obtenido de <<http://censosbolivia.ine.gob.bo>> (último acceso 15 de febrero de 2015)

- INE. (2015). *Comercio Exterior de Bolivia*. Obtenido de INE: <<http://www.ine.gob.bo:8082/comex/Main>> (último acceso 5 de marzo de 2015)
- INSA. (2015). *Audiencia Final de Rendición de Cuentas*. Obtenido de <http://www.insa.gob.bo/index.php/prensa-menu/197-el-insa-realizo-su-rendicion-de-cuentas-de-la-gestion-2014>.
- Jaldín, R. (2014). *La persistencia de la agricultura campesina y sus implicaciones alimentarias en Villa Serrano*. *Cuestión Agraria*, 1 (1), 105-136. La Paz, Bolivia: Fundación TIERRA.
- Katz, C. (2008). "El agro-capitalismo de la soja", *Anuario EDI*, n 4, Buenos Aires.
- Lee, R. (2007). *Food Security and Food Sovereignty*. *Centre for Rural Economy Discussion Paper Series No. 11*.
- Mansilla, HCF. (2014). *Una mirada crítica sobre el indianismo y la descolonización*. La Paz, Bolivia: Rincón Ediciones.
- Marconi, R. (2014). *El milagro de la inclusión financiera. La industria microfinanciera de Bolivia (1990-2013)*. La Paz, Bolivia: Hivos, PIEB, Academia Boliviana de Ciencias Económicas.
- McMichael, P. (2005). *Global Development and the Corporate Food Regime*. En F. Buttel, y P. McMichael (eds), *New Directions in the Sociology of Global Development* (Vol. 11, 269-303). Amsterdam: Elsevier.
- Medeiros, G. (2009). *El Sector Agropecuario*. La Paz, Bolivia: UDAPE.
- Méndez, A. (2015). Artículo de opinión. *Página Siete*, La Paz, Bolivia. Febrero de 2015.
- Ministerio de Comunicación. (2014). *Informe de la Gestión 2013 del Presidente Evo Morales Ayma al pueblo boliviano*. Obtenido de <http://comunicacion.gob.bo/sites/default/files/media/publicaciones/Discurso%20Presi.pdf>

- Ministerio de Planificación del Desarrollo. (2006). *Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien – Lineamientos Estratégicos*. Obtenido de <http://www.planificacion.gob.bo/sites/folders/documentos/plan.pdf>
- Müller, R., Pacheco, P., y Montero, J. (2014). *El contexto de la deforestación y degradación de los bosques en Bolivia*. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- Ormachea, E. (2009). *Soberanía y Seguridad Alimentaria en Bolivia. Políticas y estado de situación*. La Paz, Bolivia: CEDLA.
- Ortíz, A. y Soliz, L. (2007). *El arroz en Bolivia*. Cuadernos de investigación N° 67. La Paz, Bolivia: CIPCA.
- Patel, R. (2009). «Food sovereignty.» *Journal of Peasant Studies*, 36 (3), 663-706.
- Pérez, M. (2008). *Efectos de la liberalización comercial en la seguridad alimentaria de los pequeños productores de Bolivia*. La Paz, Bolivia: CIOEC, AIS, Secretariado Rural, AIPE.
- Pérez, M. (2014). *Mercado o seguridad alimentaria, dilema de los pequeños productores agrícolas de Rurrenabaque*. *Cuestión Agraria*, 1 (1), 137-162. La Paz: Fundación TIERRA.
- Pérez, M. (2007). *No todo grano que brilla es oro. Un análisis de la soya en Bolivia*. La Paz, Bolivia: CEDLA.
- Pinstrup-Andersen, P. (2009). "Food security: definition and measurement." *The Science, Sociology and Economics of Food Production and Access to Food*. (1:5-7).
- PMA. (2009). *Manual para la Evaluación de la Seguridad Alimentaria en Emergencias*. Roma, Italia: Programa Mundial de Alimentos (PMA), Servicio de Análisis de la Seguridad Alimentaria.
- PROAGRO. (2010). *Inventario Nacional de Presas en Bolivia 2010*. Cochabamba, Bolivia: Ministerio del Medio Ambiente y Agua. Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego.

- Prudencio, J. (2013). *Mitos y Debates. Análisis del tema agroalimentario en Bolivia*. La Paz, Bolivia: Agrónomos y Veterinarios sin Frontera.
- Prudencio, J. (2009). *Agricultura y pobreza en Bolivia. Los impactos del Programa de Ajuste Estructural en el sector agrícola boliviano*. La Paz, Bolivia: ABDES.
- Prudencio, J. (2014). “Renunciar a la seguridad y soberanía alimentaria por comercializar más?...o la subordinación del sistema alimentario boliviano a las exportaciones”. (Análisis del “Plan del Sector. Desarrollo agropecuario 2014-2018. Hacia 2025”), Mimeo. La Paz, Bolivia.
- Rivera, S. (2014). “El indianismo de este gobierno es de caricatura”. Entrevista a Silvia Rivera, premio nacional de ciencias sociales. *Página Siete*. 12 de octubre de 2014.
- Sanabria, H. (1993). *The Coca Boom and Rural Social Change in Bolivia*. United States: The University of Michigan Press.
- Spedding, A. (2011). *Descolonización. Crítica y problematización a partir del contexto boliviano*. La Paz, Bolivia: ISEAT.
- Svampa, M. (2013) *Consenso de los Commodities y lenguajes de valoración en América Latina*. Obtenido de: http://www.unesco.org/uy/shs/red-bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Consenso_de_Commodities.pdf
- Urioste, M. y Kay, C. (2005). *La reforma agraria inconclusa, alivio de la pobreza sin desarrollo rural*. La Paz, Bolivia: Fundación TIERRA.
- Urioste, M. (2013). La dependencia campesina del mercado urbano de alimentos: Yanacachi, monocultivo de coca y extracción de oro. En Informe 2012 *¿Comer de nuestra tierra? Estudios de caso sobre tierra y producción de alimentos en Bolivia*, (133-192). La Paz, Bolivia: Fundación TIERRA.
- Urioste, M. (2014). *En el campo, los productores de mercancías prefieren comprar sus alimentos*. *Cuestión Agraria*, 1 (1), 55-76. La Paz, Bolivia: Fundación TIERRA.

Urioste, M., Barragán, R., y Colque, G. (2007). *Los nietos de la reforma agraria, tierra y comunidad en el altiplano de Bolivia*. La Paz, Bolivia: Fundación TIERRA.

Urioste, M., y D. Pacheco. (2001). *Las tierras bajas de Bolivia a fines del siglo XX*. La Paz, Bolivia: PIEB.

Veltmeyer, H. (2015). *El extractivismo agrario en tiempos de crisis del capitalismo*. Memoria Seminario: Recientes transformaciones agrarias en Bolivia. La Paz: Fundación TIERRA (en imprenta).